

Relevo en Agricultura

LA confirmación de Miguel Arias Cañete como cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Europeo en las próximas elecciones del 25 de mayo suscita obligados comentarios sobre el balance de su gestión como ministro de Agricultura.

Quien ya estuvo al frente del Ministerio con José María Aznar ha demostrado su habilidad para desenvolverse con eficacia en las negociaciones de la Política Agrícola Común europea (PAC). Un complejo proceso que, utilizando sus propias palabras, se ha traducido en 47.000 millones de euros para España durante el periodo 2014-2020, permitiendo a todos los sectores agrarios y ganaderos seguir siendo competitivos. Pero una cosa son las negociaciones políticas de la PAC, que si se hacen mal pueden tener consecuencias desastrosas, y otra muy distinta el modelo adoptado para su aplicación en España que, con independencia de los estrictos condicionantes comunitarios, no es responsabilidad exclusiva de Bruselas.

Una agricultura competitiva se caracteriza por su elevada capacidad para colocar sus productos en los mercados mundiales. Seguir siendo competitivos, tal y como ha afirmado el ministro, supone dar por hecho que ya lo somos, lo que está bastante lejos de la realidad. Siendo muy desta-

LA TRIBUNA

*Por Joaquín Olona
y Javier Lorén*

cable el superávit comercial de nuestra balanza comercial agroalimentaria, basado en las exportaciones de frutas y hortalizas, porcino, vino y aceite de oliva, todavía estamos muy lejos de contar con una agricultura verdaderamente competitiva. Ni siquiera está claro que todos los agentes apuesten por ella.

Nuestra agricultura, al igual que nuestra economía, adolece de problemas estructurales muy graves que no terminan de abordarse. Por ejemplo, de acuerdo con los datos del último Censo Agrario del INE, más de la mitad de las explotaciones agrarias españolas venden menos de 8.000 euros anuales. La aplicación de la nueva reforma de la PAC en nuestro país no se hace con el enfoque estruc-

tural que, no solo por razones de competitividad, sería deseable. Así, la nueva definición de 'agricultor activo' como aquel que, con independencia de su renta y actividad principales, puede justificar que las subvenciones percibidas como 'pagos directos' no suponen más del 80% de sus ingresos agrícolas totales no ayuda precisamente a resolver los problemas de profesionalidad, legitimidad, eficiencia y competitividad.

Tampoco ayuda a la competitividad el hecho de que la mayor parte de esos 47.000 millones de euros, prácticamente el 90%, se destinen a complementar rentas de 'agricultores activos' mediante pagos desacoplados, es decir, con independencia de que produzcan o no lo hagan, así como al logro de objetivos ambientales, climáticos o territoriales que, siendo necesarios, son ajenos al mandato expreso que el artículo 39 del Tratado de la UE encomienda a la PAC y no siempre compatibles con la competitividad agrícola. Una prioridad que, sin ser la única a la que debe atender la política agraria, es la subrayada por el ministro.

Joaquín Olona es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. Javier Lorén es presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón